

EL DERROCAMIENTO

GONZALO MARTNER FANTA

Doctor en Ciencias Económicas, Universidad de París X.

Director del Magíster en Gerencia y Políticas Públicas, Universidad de Santiago de Chile.

Exsubsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Secretaría General de la Presidencia de Chile y exembajador de Chile en España.

Hace 50 años, se produjo el derrocamiento de un Gobierno legítimo y democrático, seguido de una represión violenta y prolongada, pero no un fracaso del proyecto histórico que inspiraba a ese gobierno. Este proyecto siguió adelante bajo otras formas, a partir de un espíritu de resistencia que se inscribe en décadas de luchas sociales.

Los puntos de vista más serenos sobre este episodio trágico de la historia de Chile no han sido los más frecuentes. Más bien, en 2023 arreciaron las descalificaciones del proyecto histórico de la izquierda y del gobierno de Salvador Allende derrocado por la fuerza. Desde el mundo conservador, se ha insistido en descalificar la experiencia de 1970-1973 en su contenido transformador y en la vigencia del ejemplo de consistencia y dignidad de su conductor, Salvador Allende. Para aquel sector de la sociedad es insalvable que Allende, como Bal-maceda, no se rindiera ante la fuerza y decidiera pagar con su «vida la lealtad del pueblo». Por esto, insiste en querer destruir su imagen y minimizar su trascendencia. A su vez, en 2023 se ha publicado un texto muy relevante y documentado del expresidente Patricio Aylwin (2023). Los argumentos más ilustrados oscilan entre la idea del fracaso de Allende y la no vigencia de su proyecto.

El Plan de Allende

El Presidente Allende fue un conductor político que actuó en una situación extremadamente adversa y realizó ingentes esfuerzos para hacer posibles cambios indispensables en la sociedad chilena y, a la vez, estabilizarlos en determinados límites. *Allende buscó desde 1971 que un plebiscito consolidara las reformas estructurales que emprendió* (Garcés, 2013): es decir, extender la nacionalización del cobre, culminar la reforma agraria y

conformar un área bancaria e industrial socializada. En esta idea de estabilización, a través de la legitimación democrática, los dos principales partidos de su coalición —el Partido Comunista (PC), que sólo lo hizo en septiembre de 1973, y el Partido Socialista (PS)— no lo acompañaron, cometiendo un error estratégico. Allende actuó frente a un plan de derrocamiento interno y externo poderoso y sistemático. *Buscó con tesón un acuerdo con la Democracia Cristiana (DC), como el que permitió su llegada al Gobierno en 1970*, logro histórico contra la expresa intervención violenta de Estados Unidos y la voluntad conspirativa de la derecha y del freísmo DC que las circunstancias le impidieron proyectar. No obstante, no debe olvidarse que estuvo cerca de lograr *una salida política a la crisis a través de un plebiscito, el cual no alcanzó a anunciar el 11 de septiembre de 1973* y que hubiera salvado con una cierta probabilidad de éxito los cauces democráticos chilenos y, a lo mejor, dado tiempo a una recomposición de una izquierda que hubiera procesado sus radicalizaciones inconducentes. Las fuerzas que enfrentó terminaron siendo más poderosas y lograron el derrocamiento violento del gobierno.

El plan de gobierno de Salvador Allende incluía realizar cambios estructurales y respetar y ampliar la institucionalidad democrática. El compromiso con esta institucionalidad se mantuvo desde el primer hasta el último día de su administración. Otra cosa es que, a la postre, una mayoría del parlamento e instituciones politizadas por la oposición se sumaran con entusiasmo a declarar lo contrario, sin que les pasara absolutamente nada. *Existió entre noviembre de 1970 y septiembre de 1973 un régimen de plenas libertades y de separación de poderes, en medio de un agudo conflicto social y político.* Quienes llegan a reconocer este hecho señalan que, en cualquier caso, el propósito del gobierno de Allende era terminar con la democracia y que ello era lo que había que impedir mediante un golpe militar. Para algunos se trataba de una especie de mal menor frente al supuesto mal mayor de caer en la esfera de influencia soviética y perder las libertades. Esto no tiene sustento en los hechos cuales muestran, antes bien, que *el gobierno de Estados Unidos, aliado a la derecha civil y militar, se propuso impedir, sin éxito gracias a la conducción de la DC de la época, que Allende llegara siquiera a asumir el gobierno.* Más aún, *el presidente Allende se aprestaba a*

convocar un plebiscito el 11 de septiembre de 1973 para permitir una salida democrática a la crisis, es decir, todo lo contrario de lo que la derecha afirma.

El tema de fondo es que el gobierno de Allende se propuso emprender reformas estructurales a la economía y la sociedad chilena. Estas incluyeron, en primer lugar, la *nacionalización del cobre*, aprobada por la unanimidad del parlamento, para que sus excedentes fueran utilizados en la industrialización del país y en un mayor bienestar social de sus habitantes, y dejaran de ser rentas transferidas al exterior. Esto se logró, a pesar de su reversión parcial posterior. Y, en segundo lugar, se propuso *poner fin al latifundio y al inquilinaje*, utilizando la ley de 1967 —rémora social y productiva que desapareció del mapa económico chileno, pero, a la postre, no en beneficio del campesinado sino de una revolución empresarial exportadora exitosa, después de una represión inicial brutal. Estos son dos de los principales legados del gobierno de Allende, junto a un proceso de participación popular sin precedentes.

Lo que fue problemático y polarizador, como se reseña en Martner (2023), fue la nacionalización de la banca y la creación de un sector industrial y de distribución estatal, pero sin un diseño que tuviera un consenso al interior del gobierno ni de la sociedad. La expansión inorgánica de este sector produjo un desborde en la puesta en práctica de la reactivación de corto plazo, basada en una expansión salarial que debía impulsar el crecimiento de la economía usando las capacidades instaladas. La meta de participación de los salarios en el producto programada para 1976 se alcanzó en 1971. Al excederse este objetivo, se produjo una espiral precios-salarios alimentada por intervenciones de empresas y explotaciones agrícolas bajo la presión «desde abajo» de cambios en la propiedad, incluyendo el mundo mapuche en la zona de Cautín.

Esta presión social se había intensificado con la reforma agraria de 1967 y se extendió a empresas de diverso tipo, empujada por una parte de la izquierda y de los grupos escindidos de la DC, que hacía equivaler socialismo a poner cualquier empresa que se pusiera en manos del Estado. El plan gubernamental no era este, sin embargo, sino la conformación de un sector acotado de 91 empresas públicas que sustentaran un nuevo proceso de expansión productiva, como ya lo había hecho la creación de empresas por la Corporación de Fomento

(CORFO) en décadas previas. Tampoco se trataba de eliminar el mercado, sino de construir una amplia planificación del esfuerzo de inversión pública y privada para un mayor desarrollo de largo plazo.

Se llegó a unas 500 empresas intervenidas, en las cuales las planillas salariales aumentaron y fueron financiadas con emisión monetaria. La suma del boicot empresarial financiado desde Estados Unidos, el fin del crédito externo y la espiral precios-salarios llevaron a una situación paradójica: el consumo popular aumentó sustancialmente respecto a los años previos, pero su acceso se hizo en condiciones de dificultad cotidiana en el abastecimiento, con la correspondiente erosión del apoyo social. Esto movilizó en contra del gobierno a amplios sectores medios y disminuyó la adhesión al gobierno. La intervención de empresas de distinto tamaño no programada, pero validada por decretos de continuidad de abastecimiento, se constituyó en un factor de desequilibrio fiscal y monetario y de rupturas de abastecimiento, en medio de un amplio aumento del consumo y una menor oferta por una menor producción y el estrangulamiento de la capacidad de importar logrado por Estados Unidos. Esta fue la represalia por la expropiación del cobre con descuento en la indemnización por utilidades excesivas pasadas. Se sumaron reajustes salariales del sector público no financiados, dada la negativa sistemática de la oposición en el parlamento. Aprobar gastos, pero no los ingresos propuestos por el gobierno, sería calificado hoy de populismo por todo el sistema político. Sin embargo, es lo que hicieron la derecha y la DC en la época, junto a una estrategia de parálisis progresiva del país, con atentados con bombas realizados por la extrema derecha civil con apoyo de la inteligencia de la Marina y con paros y huelgas estimulados por la cúpula empresarial y financiados por Estados Unidos.

El PS y la izquierda radicalizada estimularon la «revolución desde abajo» que, siendo legítima en sus motivaciones, derivó hacia desbordes salariales y ocupaciones de unidades productivas que no ayudaron a llegar a una nueva estabilidad que cautelara la alianza del mundo popular con los sectores medios y enfrentara la reacción implacable de los afectados por los cambios iniciales. La «revolución desde abajo» hizo muy difícil lograr un ordenamiento económico después del impulso transformador inicial de 1971. Se ha puesto poco el acento en la magnitud de este proceso social en el período de 1967-1973, como hace el

importante libro de Peter Winn (2013). Este proceso era legítimo y, en todo caso, una realidad. No obstante, debía ser canalizada, orientada y compatibilizada con la estabilización de lo logrado con una conducción de los partidos de gobierno; pero, se dividieron en este tema —que era crucial en las condiciones chilenas— con un gobierno sin mayoría parlamentaria, acosado en lo económico por Estados Unidos con efectos devastadores, aunque algunos insistan en querer minimizarlos. Estados Unidos cortó el crédito externo y estranguló las importaciones, mientras en el Parlamento la oposición aprobaba, como se mencionó, los reajustes sin los ingresos para financiarlos, alimentando el déficit fiscal y la inflación. *La economía chilena «gritó», como fue la orden dada en 1970 por Nixon a la CIA* (por su sigla en inglés, Agencia Central de Inteligencia), sin nada que se pareciera a un apoyo sustitutivo como el soviético brindado a Cuba, cuya situación geoestratégica era completamente distinta. La Unión Soviética no apoyaba sino en pequeña escala a Allende, más allá de la buena relación con el PC chileno (al que contribuía financieramente desde hace décadas), importante entre los PC occidentales, entre otras cosas, porque su modelo político y económico era sustancialmente diferente.

Tabla N°1.

Datos Macroeconómicos 1967-1976

Año	Producto Interno Bruto	Demanda Interna	Formación Bruta de Capital Fijo	Consumo y Resto Demanda Interna	Exportaciones	Importaciones	Inflación	Desempleo
1967	3,6	1,9	2,1	1,9	3,3	-9,2	21,9	4,2
1968	3,6	4,5	9,5	3,6	2,0	9,1	29,7	4,4
1969	4,1	5,5	5,0	5,5	3,6	14,1	29,3	5,0
1970	1,7	1,5	6,5	0,6	2,1	1,0	34,9	5,1
1971	9,6	10,6	-2,3	13,1	0,8	8,5	22,1	3,3
1972	-0,7	1,2	-20,1	5,2	-15,1	3,2	163,4	2,5
1973	-5,0	-5,8	-6,0	-5,7	2,8	-5,4	508,1	4,3
1974	1,2	-4,0	19,1	-7,6	45,9	3,4	375,9	8,7
1975	-12,3	-19,9	-22,8	-19,3	2,4	-38,5	340,7	14,0
1976	3,6	-0,9	-14,8	2,2	24,3	4,2	174,3	13,9

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de Banco Central de Chile y Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda.

El presidente Allende se empeñó en estabilizar la situación económica, pero sin renunciar a la nacionalización del cobre, a la reforma agraria y la ampliación de un núcleo de

empresas industriales socializadas que permitiera sostener un proceso de crecimiento que redundara en el largo plazo en aumentos del bienestar de la mayoría social. *Se debía estabilizar el proceso de cambios, contener las desorganizaciones productivas que son propias de transferencias de propiedad de gran magnitud y evitar una «huelga empresarial» generalizada*, como la pronosticada por Michal Kalecki décadas antes en condiciones de este tipo.

Las «reformas estructurales radicales» eran el límite necesario de esta etapa histórica y no dimensionarlo fue el error de la izquierda radical de la época. El Gobierno de la Unidad Popular quedó preso en la lógica implacable de la Guerra Fría. No pudo controlar el desborde social y las presiones expansivas de la demanda no encontraban respuestas en una oferta en plena reestructuración y, a la vez, sometida a una fuerte restricción externa. La política de reactivación se desbordó y volvió en su contra, lo que erosionó el apoyo al Gobierno, aunque se mantuvo en 43% del electorado en la elección parlamentaria de marzo de 1973, después del 50% de la elección municipal de 1971 y el 36% de la elección presidencial de 1970. Sobre todo, irritó y movilizó en su contra a amplios sectores medios que prestaron apoyo social al golpe de Estado de 1973.

Una parte de la coalición de gobierno sostenía, a su vez, una difusa estrategia de «acumular fuerzas para la toma del poder», poniendo empresas de todo tipo bajo control gubernamental, pero sin un diseño sobre su funcionamiento y su coherencia productiva de conjunto, en oposición a buena parte de los equipos económicos de gobierno y del propio presidente Allende. Este era un sector que era crítico de la democracia parlamentaria y que se sentía cómodo con el modelo cubano, pero sin tomar en cuenta que las condiciones eran sustancialmente diferentes. No por casualidad Ernesto Guevara tuvo para Chile y Uruguay un diseño de bases logísticas, pero nada que se pareciera a que estos países fueran incluidos en procesos de lucha armada, la cual en cambio favoreció en otros países para desplazar a dictaduras militares.

El *presidente Allende* buscó con tesón un acuerdo con la DC, como el que permitió su llegada al gobierno en 1970. No debe olvidarse que estuvo cerca de lograr una salida política a la crisis a través de un plebiscito el cual no alcanzó a anunciar el 11 de septiembre de 1973.

El golpe militar era evitable a través de un plebiscito que la oposición tenía buenas opciones de ganar y cuyos resultados el presidente Allende iba a aceptar, le fueran o no favorables. En caso de no serlo, hubiera implicado un adelantamiento de las elecciones presidenciales. *El freísmo negó todo acuerdo al presidente Allende durante su gobierno, lo que reafirmó cuando recuperó el control del partido en 1973.* Privilegió desde el primer momento el golpe de Estado, en alianza con Estados Unidos y la derecha, pensando que le permitiría en breve plazo volver al poder en condiciones de control represivo de la izquierda. *Tampoco ayudó al esfuerzo político del presidente Allende la reticencia de la dirección del Partido Socialista, que no ofreció una alternativa que no fuera una radicalización sin soporte en alguna fuerza militar propia de alguna significación —tampoco la tuvo el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)— y sin que estuvieran preparando insurrección alguna —como sí lo hicieron Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, en Argentina.*

El golpismo en las Fuerzas Armadas, activo desde 1968, ya no pudo ser contenido por los militares constitucionalistas. Con su mando atacado por la derecha y el freísmo, a través de los generales Arellano Stark y Bonilla, culminó en la renuncia del general Prats y la posterior traición de Pinochet —a pesar de que dos de los cuatro comandantes en Jefe (aquellos de la Armada y Carabineros) se mantuvieron hasta el 11 de septiembre leales a la Constitución y al Presidente Allende.

En el balance económico, la trayectoria del Producto Interno Bruto fue de un muy alto crecimiento inicial en 1971 (9,6%), seguido de una caída de -0,7% en 1972 y otra de -5,0% en 1973 —aunque la responsabilidad del gobierno de la UP se circunscribe en este último año hasta el 11 de septiembre, pues desde octubre se aplicó una fuerte política recesiva por la Junta Militar que tomó el poder. La producción minera, manufacturera, de la construcción y agrícola bajó en 3,8%, 7,7%, 11,0% y 10,3% en 1973, respectivamente —cifras, en todo caso inferiores, a las crisis de 1975 y 1982-83—, disminuyendo la capacidad de exportar y aumentando la demanda por importaciones de alimentos e insumos, un efecto tijera que se tradujo en el desabastecimiento de productos. El crecimiento promedio del PIB en el período 1971-1973 fue de un 1,3% y reflejó una expansión del consumo interno que no fue sostenible en los dos años siguientes por la dinámica inflacionaria —la cual disminuyó los

ingresos reales— y el desequilibrio comercial que se creó en medio de una limitación sustancial del crédito externo, ya mencionados. El contexto fue el de un severo boicot empresarial interno y externo, por lo que la inversión disminuyó en los tres años, a pesar del inicio de la construcción de 120 mil viviendas. No obstante, el PIB fue superior en 1973 en comparación con 1970, según las cifras del Banco Central. El Índice de Precios al Consumidor tuvo también un relativamente buen resultado en 1971, pero en 1972 se decidió una política brusca de ajuste de precios. Los controles de precios fueron eliminados después del golpe de Estado y la inflación llegó a 508% en 1973. La contrapartida positiva fue que el desempleo llegó a los niveles más bajos conocidos en la historia contemporánea y las familias más pobres lograron acceder al consumo de bienes básicos como nunca antes, aunque se fueron haciendo progresivamente más escasos.

Después del golpe de Estado, la normalización productiva, seriamente afectada por las paralizaciones por razones políticas del transporte privado y de diversas unidades productivas en manos privadas en todo el tejido económico, así como el fin del estrangulamiento del crédito externo, permitieron un crecimiento de 1,2% del PIB en 1974. Luego, sobrevino en 1975 la peor crisis económica de Chile en su historia contemporánea, mucho más aguda que la de 1972-73. Hay quienes la atribuyen a secuelas de la Unidad Popular, pero es lo mismo que se dijera que la recesión de 1973 era debida a las secuelas de la gestión de Frei. Lo que ocurrió es que, en 1975, frente a una inflación en reducción, pero aún muy elevada, Pinochet le hizo caso a la recomendación que vino a darle personalmente Milton Friedman en marzo de 1975:

Existe sólo una manera de terminar con la inflación: reducir drásticamente la tasa de incremento en la cantidad de dinero. En la situación de Chile, el único modo para lograr la disminución de la tasa de incremento en la cantidad de dinero es reducir el déficit fiscal.

El monetarismo de choque llevó a una contracción enorme, fruto de una reducción de 19,9% de la demanda interna por el recorte del gasto público y del crédito. Después del acceso al poder por los Chicago Boys en abril de 1975, hacia 1976 el nivel del PIB era inferior al de

1973 y similar al de 1969. Este dato es de tres años después del fin de la Unidad Popular. Más tarde, la economía chilena tuvo un importante crecimiento, pero de nuevo mediante una fuerte expansión de la demanda interna y ahora también de las exportaciones. Sin embargo, nuevamente la política monetarista dogmática, en este caso mediante la fijación del tipo de cambio nominal inspirada en el llamado enfoque monetario de la balanza de pagos, llevó a la segunda crisis más grave de la economía chilena, vale decir, la crisis de 1982 y 1983 (con -11,5% y -5,6% de caída del PIB, respectivamente). La recesión de 1972-1973 fue significativa, pero nada comparable con las dos depresiones provocadas por los Chicago Boys en Chile. A pesar de la política de choque de 1975, la inflación bajó de un dígito recién en 1981, después de la fijación del tipo de cambio en 39 pesos en 1979 y la apertura comercial y financiera al exterior, y al costo de otra violenta recesión, la consiguiente devaluación y la vuelta a una inflación elevada. En 1990, la inflación fue de 27,1% y el asunto fue resuelto en tal década con una política fiscal disciplinada y acuerdos de precios-salarios entre gobierno, empresarios y organizaciones sindicales que abatieron las expectativas inflacionarias y la espiral inflacionista instalada desde hace décadas en la economía chilena, incluso después de la apertura comercial al exterior a fines de los años 1970.

El Futuro

¿Qué se puede pensar 50 años después? *El fundamento del proyecto allendista fue y sigue siendo la búsqueda de una sociedad democrática con justicia social y con recuperación para el país de sus recursos naturales.* Hay dimensiones adicionales, como el énfasis igualitario en materia de género y el respeto a las disidencias, junto a la urgente tarea de la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, no son dimensiones sustitutivas de las existentes en 1970-1973, como la aspiración colectiva a las libertades civiles y políticas y a una democracia basada en la soberanía popular y la prevalencia de la voluntad de la mayoría con respeto de las minorías, ni la aspiración a una igualdad efectiva de oportunidades y derechos y a la reciprocidad comunitaria y solidaria (Martner, 2019).

Lo medular de la pugna histórica chilena permanece en las actuales circunstancias, aunque no está a la orden del día para la oposición derrocar al gobierno del presidente Boric,

que se declara cercano a la inspiración de Allende, sino inmovilizarlo y desacreditar sus propósitos. Su discurso y actividad parlamentaria pretende dejar establecido que deben quedar fuera del horizonte de posibilidades de la acción política aquellas transformaciones que recuperen para el país sus recursos naturales y otorguen al Estado un rol económico más significativo en beneficio del trabajo y de los sectores más pobres y marginados de la sociedad. La economía debe organizarse alrededor de los intereses del capital y las políticas sociales deben subordinarse a ellos.

El problema es que *lo que se intenta expulsar por la puerta suele volver por las ventanas y las rendijas*. Este es el sentido profundo de la rebelión de 2019 que volvió a poner en cuestión el dominio oligárquico y la concentración económica en Chile, y su traducción en desigualdades y abusos sobre las personas carentes de poder.

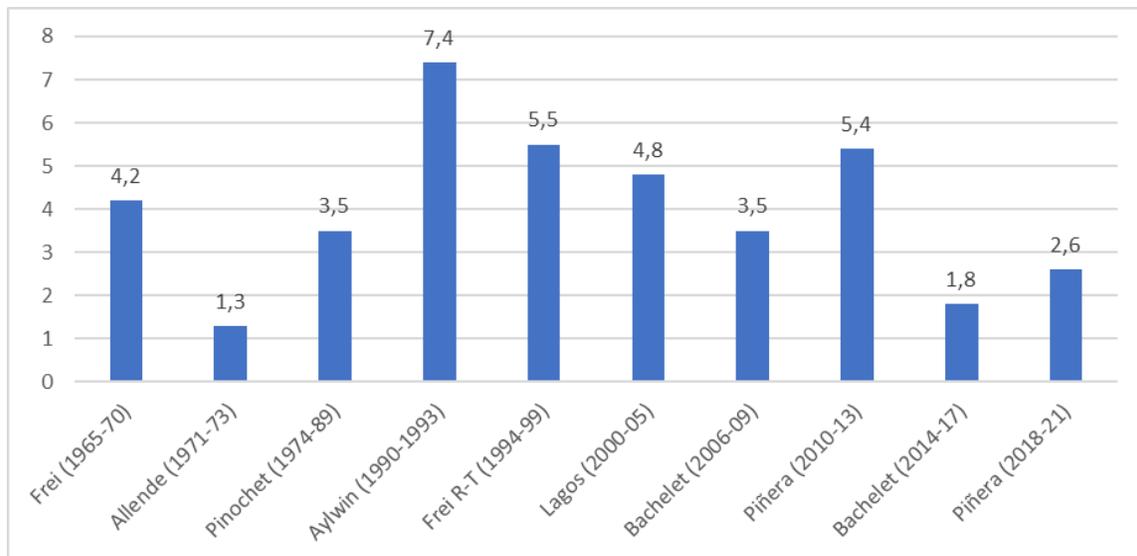
El instrumento principal para quienes comparten el objetivo de desplazar la concentración económica y las desigualdades sociales tampoco ha variado mucho: la construcción estable de *una coalición amplia que exprese a un bloque social y político por cambios progresivos, con vocación mayoritaria, capacidad de entenderse con el centro y de proveer estabilidad política*. La radical restauración del dominio oligárquico entre 1973 y 1989 fue efectiva, aunque no definitiva, y ha tenido que aceptar modulaciones híbridas a lo largo del tiempo que pueden bascular a un *Estado Social de Derecho*. No siguió ya siendo sustentada en la hacienda y su cultura, sino en grupos financieros hiperconcentrados y en la cultura del individualismo mercantil y la ilusión de la movilidad social mediante el crecimiento económico. Este perdió dinamismo desde hace más de una década y dio lugar a la vasta rebelión de 2019, a un proceso constituyente y al desplazamiento de la derecha del gobierno en 2021, aunque no del parlamento y se haya recompuesto en 2022 con su victoria contra el proyecto constitucional de la Convención.

En 2019-2021, se vivió la secuencia de una nueva «revolución desde abajo». Esta se tradujo incluso, en este caso refrendada por dos tercios del parlamento, en un golpe al corazón del modelo privatista de seguridad social, mediante los retiros de recursos desde los fondos de pensiones. Así como ocurrió con los reajustes salariales y las ocupaciones de empresas bajo la Unidad Popular, el gobierno de Piñera perdió parte del control de la política

económica. Sin embargo, según las cifras del Banco Central, en 1971 el consumo de los hogares aumentó en 13%, el consumo de gobierno en 12% y las importaciones en 9%, empujando un crecimiento del PIB también de 9%. En 2021, en la salida de la crisis pandémica, el consumo de los hogares aumentó en 21% y el consumo de gobierno en 14%, con lo que la demanda interna aumentó en 22% y las importaciones en 32%, empujando un crecimiento del PIB de 12%. Como se observa, la tan criticada política económica de la UP no tuvo la intensidad expansiva del último año de Piñera II, ya desbordado. La diferencia, crucial es que el bloqueo externo en 1971-73 no permitió la continuidad productiva, afectada por los cambios de propiedad, y produjo rupturas de abastecimiento de bienes básicos y una alta inflación. Esto reafirma una vez más la importancia del bloqueo externo en el desenlace del gobierno de la Unidad Popular y de mantener hoy una inserción externa estable y diversificada para llevar a cabo cualquier proyecto de cambio progresista.

Gráfico N°1.

Tasa de Crecimiento Interanual Promedio del PIB por Gobiernos en Chile, 1965-2021



Nota. Fuente: elaboración propia a partir de Banco Central de Chile.

El desafío de mediano y largo plazo para Chile es mantener condiciones adecuadas de expansión de la demanda interna y aumentos de productividad que mejoren la competitividad sistémica de la economía. Si se toma en consideración los asuntos distributivo y

ambiental, esto debiera ocurrir de preferencia mejorando los ingresos y el consumo de los sectores de menos ingresos y aumentando la inversión pública sostenible, junto a una política industrial que fomente mayores incrementos del valor agregado nacional que diversifiquen las exportaciones y que amplíen la sustitución de importaciones hacia nuevos sectores, cautelando los efectos en el cambio climático y los ecosistemas locales.

Para avanzar en aquellos objetivos, se requiere de una política fiscal que —junto a la prioridad de expandir la inversión pública y el consumo de gobierno en educación, salud y bienes públicos urbanos y realizar transferencias redistributivas más amplias a las familias— contenga los déficits fiscales estructurales en los límites de una deuda pública que genere pagos de intereses al menos equivalentes al crecimiento del PIB. Para lograrlo, son indispensables reformas tributarias sucesivas que, al menos, pongan a Chile en los niveles medios de presión tributaria de los países de la OCDE. Y se requiere de una política monetaria que cautele que la inflación no vaya más allá de un horizonte de 3-4% anual, pero que, a la vez, no mantenga tasas de desempleo por encima de las necesarias para alcanzar tal meta, como ha sido su práctica en los últimos años.

En materia de políticas de estímulo de la oferta, se requiere mantener un tipo de cambio competitivo, lograr una transición energética acelerada —ya encaminada en buena medida— junto a un mayor impulso a las políticas de innovación financiadas con las rentas mineras, además de más inversiones en infraestructuras. La política de competencia debe ser mucho más activa para impedir las frecuentes rentas de monopolio en los mercados financieros y de bienes.

Sería un error histórico dejar inalterada la estructura distributiva o centrarse en disminuir «trabas burocráticas» cuales no son arbitrarias, sino que protegen a las personas y al ambiente. Hay quienes entienden mejorar la competitividad de la economía como sinónimo de disminución de costos salariales y de relajación de las protecciones ambientales, lo que no tiene mayor sentido si se considera que la clave son los aumentos de la productividad. Se requiere para este fin de mejoras continuas en la educación y en la calificación de la fuerza de trabajo y de adaptaciones al cambio demográfico (el crecimiento de la población ha caído a 0,6% anual en 2022).

La distribución del ingreso sólo podría cambiar estructuralmente. Sin embargo, con una reforma tributaria que aumente los impuestos progresivos y una negociación colectiva de salarios y condiciones de trabajo más allá de la empresa individual y con mayores ingresos de reemplazo provistos por los sistemas de seguro de desempleo, de pensiones y de salud, junto a un ingreso básico universal (simplificado y financiado con un impuesto a las grandes fortunas) que *asegure una subsistencia básica y mejore la autonomía y capacidad de negociación de los que viven de su trabajo.* Y los cambios en la distribución de la riqueza y de los activos productivos, aún más concentrada que la de los ingresos, requiere la maduración de cambios en los sistemas educativos, el acceso al financiamiento de las pequeñas y microempresas, en las compras públicas y en la difusión tecnológica, junto a políticas de competencia activas y cambios en los regímenes tributarios de herencia. De otro modo, el estancamiento económico y la precariedad laboral, y la consiguiente inestabilidad social, seguirán marcando el presente y el futuro de Chile.

Referencias

Aylwin, P. (2023). *La Experiencia Política de la Unidad Popular 1970-1973.* Debate.

Garcés, J. (2013). *Allende y la Experiencia Chilena. Las Armas de la Política.* Siglo XXI Editores.

Martner, G. D. (2023). «*Pagaré con Vida la Lealtad del Pueblo*». *A 50 Años del Derrocamiento de Salvador Allende.* LOM Ediciones.

Martner, G. D. (2019). *Esto No Da para más.* Fundación Friedrich Ebert.

Winn, P. (2010). *La Revolución Chilena.* LOM Ediciones.